

XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán, 2007.

Bolivia. Raíces históricas de un presente conflictivo (1985-2003).

Hernández, Juan Luis (UBA).

Cita:

Hernández, Juan Luis (UBA). (2007). *Bolivia. Raíces históricas de un presente conflictivo (1985-2003)*. XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-108/1003>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

XI° JORNADAS INTERESCUELAS/ DEPARTAMENTOS DE HISTORIA

Título: Bolivia. Raíces históricas de un presente conflictivo (1985-2003).

Mesa Temática Abierta: Nro 112. “Bolivia y la región andina. Conflictos sociales, procesos socio-económicos, cultura e identidad (Siglo XX).”

Coordinadores: Alberto Bartolini, Magdalena Cajías, Juan Luis Hernández

Universidad, Facultad y Dependencia: Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA).

Autor: Juan Luis Hernández, docente cátedra Problemas Latinoamericanos Contemporáneos (FFyL – UBA).

Dirección: Sánchez de Bustamante 444, 17 E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfono: 4862-8242

E-mail: jlhernandez50@yahoo.com.ar

El objetivo de esta ponencia es poner en debate distintas interpretaciones sobre las grandes luchas de los últimos años -la lucha por el agua y la vida en abril y setiembre de 2000 y la guerra del gas en octubre de 2003- que pusieron fin al ciclo de reformas neo-liberales iniciado en 1985 en Bolivia. Con este propósito, haremos primero una sucinta descripción de las reformas neo-liberales, a continuación un breve relato de la resistencia a las mismas generada desde los sectores populares, expresadas en las movilizaciones que conmovieron los primeros años del siglo XXI boliviano, para pasar después a debatir las interpretaciones de los sucesos que abrieron el cauce del proceso actual.

LAS REFORMAS NEOLIBERALES

En Bolivia, el llamado “Estado del 52”, surgido a partir del triunfo de la insurrección de abril, y cuya carta fundacional fue la nacionalización de la minería, la reforma agraria y el sufragio universal, comenzará a ser desmantelado a partir de 1985. La peculiaridad de este proceso es que el “Estado del 52” va a ser liquidado por sus mismos fundadores: el MNR y su líder histórico, el cuatro veces presidente Víctor Paz Estenssoro. Las reformas estructurales que éste inicia a mediados de los '80 implicarán profundas mutaciones en el estado y la sociedad, una reconfiguración de las clases sociales y la aparición de nuevas estrategias y formas de lucha de los sectores populares.

En 1985, como consecuencia del fracaso de la Unidad Democrática y Popular (UDP) de Hernán Siles Suazo, se anticiparon las elecciones. El resultado de este proceso será el ascenso del MNR al gobierno y de Víctor Paz Estenssoro a su cuarto mandato

presidencial, con un proyecto de corte neo-liberal que tendrá el apoyo del MIR de Jaime Paz Zamora y de la ADN del ex dictador, y ahora garante de la “Nueva Política Económica” (NEP), general Hugo Banzer Suárez.¹

Con el argumento excluyente de batir la hiperinflación que asoló la gestión de Siles Suazo, y resolver el endeudamiento externo del país, el gobierno de Paz Estenssoro dictó el Decreto Supremo 21060 en agosto de 1985. Sus aspectos más importantes eran:

- 1) Liberación de precios y tipo de cambio.
- 2) Apertura al exterior (reducción tarifas aduaneras, libre movimiento de bienes y capitales).
- 3) Desmantelamiento y privatización de empresas públicas y transferencias de actividades al sector privado.
- 4) Congelamiento de salarios en el sector público y re-localización del personal de las empresas privatizadas y/o cerradas.²

En el marco del 21060, la medida central adoptada por Paz Estenssoro fue la liquidación de COMIBOL y de la gran minería boliviana. Los yacimientos considerados rentables fueron privatizados, mientras que los que no interesaban al capital privado fueron concesionados a los propios mineros (mediante cooperativas) o directamente cerrados. Según Bedregal Gutiérrez, ministro del gobierno de Paz, y ex presidente de COMIBOL, sobre 30.000 obreros y empleados de la minería nacionalizada fueron despedidos 23.000.³ En los años siguientes, la aplicación del proyecto neoliberal del gobierno del MNR produjo un desempleo del 21 %. Según datos extraídos de fuentes oficiales, en el período 1985-1989 el empleo se redujo en la industria un 19,5 %, y en la minería un 44,3 %, mientras a nivel nacional la masa salarial real cayó un 30 % en esos años.⁴

Las reformas neo-liberales tuvieron efectos sociales y políticos trascendentes. Los mineros “re-localizados” recibieron indemnizaciones del Estado, financiadas por organismos internacionales. Muchos se trasladaron con sus familias a cultivar coca en el

¹ Banzer ganó las elecciones de junio de 1985 con el 28,55 % de los votos, seguido por Paz Estenssoro con el 26,40 %, el MIR obtuvo el 8,90 %. En el Congreso los legisladores del MIR y del MNR ungieron presidente a Paz Estenssoro, quien después firmó un acuerdo con Banzer (el “Pacto de la Democracia”) para aplicar su proyecto neo-liberal. Eduardo Arze Cuadros. *El programa del MNR y la Revolución Nacional*, La Paz, Plural, 2002, p. 378.

² El D. S. 21060 está analizado desde distintas perspectivas en: Guillermo Bedregal Gutierrez. *Dialéctica de la hiperinflación en Bolivia*, Buenos Aires, Temática, 1988; y Washington Estellano. “Bolivia, del populismo a la economía de la coca”, Buenos Aires, *Cuadernos del Sur* N° 12, 1991.

³ Citado por Arze Cuadros, ob. cit., p. 394.

⁴ Arze Cuadros, ob. cit., p. 405. Las cifras oficiales de desempleo están disfrazadas por que no se cuentan como tales a los “relocalizados”.

Chapare, cuya producción tuvo incrementos significativos en los años siguientes; otros se asentaron en las laderas y barriadas de El Alto, ocupándose en distintas actividades informales en esa ciudad y en La Paz. Estos mineros, que mantenían sus tradiciones políticas e ideológicas así como su capacidad de organización y militancia, en donde se instalaron se convirtieron en activos organizadores sociales, tanto en el ámbito rural como urbano.⁵

A su vez se asistió a mutaciones políticas importantes. El “Pacto de gobernabilidad” sellado por el MNR, el ADN y el MIR, permitió el recambio de estas fuerzas políticas en los sucesivos turnos presidenciales sin sobresaltos ni para la elite ni para el sistema político. A su vez, se formaron nuevos partidos, la UCS y el CONDEPA, que a grandes rasgos representaban, con un discurso populista, a la “burguesía chola” que no era aceptada en el bloque de poder, dado el carácter racista de la elite boliviana.⁶

Concluido el mandato de Paz Estenssoro, le sucede en el gobierno Jaime Paz Zamora (1989-1993), y a éste, el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada (1993-1997), quien había sido ministro de coordinación durante la gestión de Paz Estenssoro. Es en este período donde se implementan las reformas neo-liberales de segunda generación, plasmadas en cuatro leyes fundamentales: la Ley de Reforma Educativa, la Ley de Participación Popular, la modificación del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA) y la Ley de privatización de los hidrocarburos.

Es interesante señalar que las dos primeras leyes fueron presentadas a través del discurso del “multiculturalismo”, es decir, el reconocimiento de la “diferencia cultural”, poniendo fin, supuestamente, a un sistema educativo asentado en la “homogeneidad cultural como base de la nación.” La Ley de Participación Popular, promulgada en 1994, amplía la jurisdicción territorial de los municipios -superponiéndola con la de las comunidades- otorga a las alcaldías coparticipación tributaria en los impuestos internos del 20 %, y les transfiere la administración y mantenimiento de la infraestructura física de educación, caminos, salud y riego. Junto con la Ley INRA, que ofrecía la titularización de tierras comunitarias de origen, se intentaba debilitar a las autoridades étnicas en las comunidades, fragmentar su territorio y quebrar la aplicación de los usos y costumbres ancestrales en la regulación de la vida comunitaria.⁷

⁵ W. Estellano, ob. cit, pp. 72 y sigs.

⁶ La Unión Cívica Solidaria (UCS) estaba dirigida por el industrial cervecero Max Fernández, y el Partido Conciencia de Patria (CONDEPA), por “el compadre” Carlos Palenque.

Es más conocida la llamada Ley de Capitalización, aprobada en 1994, con la que se transfirió a la actividad privada diversas empresas estatales, siendo la más importante YPF. Esta última fue subdividida, cada empresa o sector resultante fue transformada en una primera etapa en una empresa mixta mediante la asociación con un socio “estratégico”, que aportaba el 50 % del valor de la empresa establecido mediante una licitación, quedándose con el control de la misma. Posteriormente, su capital era particionado en acciones que pasaban a cotizar en la bolsa. Es así como los yacimientos, refinerías y ductos de petróleo y gas -las únicas riquezas exportables de Bolivia en la actualidad- pasaron a manos de grandes compañías extranjeras -PETROBRAS, REPSOL-YPF, junto a firmas británicas y francesas. El edificio legal fue coronado con el Decreto Supremo 24806, de 1997, por el cual el Estado reconoce el derecho de propiedad de las empresas que explotan y comercializan el gas natural en boca de pozo, renunciando a la soberanía sobre este recurso a manos del capital privado. El escenario estaba listo para la enajenación de los últimos y más valiosos recursos del país: el agua y el gas.

LA GUERRA DEL AGUA

La implementación de las reformas neo-liberales en Bolivia no fue un paseo para las clases dominantes. A lo largo de los últimos quince años del siglo XX, tuvo lugar una resistencia pertinaz de los sectores subalternos a las políticas de la elite, tendientes a la aplicación de planes de ajuste estructural y concentración del ingreso, mientras que con el discurso de la multiculturalidad el Estado toleraba símbolos y elementos culturales originarios pero excluía a las mayorías de los mecanismos decisorios del poder. La resistencia popular también atravesó un proceso de reconfiguración acorde las transformaciones sociales que vivía el país. Es así como la COB (Central Obrera Boliviana) -y con ella la FSTMB (Federación Sindical Trabajadores Mineros de Bolivia)- perdió la centralidad en las luchas sociales que había mantenido durante cuarenta años, mientras la CSUTCB (Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia) con sus sindicatos de base, federaciones provinciales y departamentales se extendía por todo el país. Ya en 1979, la CSUTCB demostró la potencia del movimiento campesino con un bloqueo de caminos que paralizó al país, mientras los primeros años de la década del '80 fueron testigos de las últimas grandes luchas de los trabajadores mineros agrupados en la FSTMB y la COB. Esto debe ser

⁷ Pablo Regalsky. “Bolivia indígena y campesina”, en *Herramienta* N° 31, Buenos Aires, 2006.

tomado con mucho cuidado, ya que, como ya dijimos, los mineros “re-localizados” y expulsados de los yacimientos mantuvieron sus tradiciones combativas y radicalizadas en los nuevos lugares en que se asentaron, en el ámbito rural y en las ciudades.

El despliegue de la organización campesina a nivel nacional, superando décadas de sometimiento al movimientismo y al Pacto Militar Campesino, tiene su punto de partida en el surgimiento del Katarismo, un movimiento de reivindicación cultural de las mayorías originarias, surgido en los primeros ’70. En las dos décadas posteriores, el Katarismo, que tuvo éxito en la recuperación de las centrales campesinas y en la formación de la CSUTCB en 1978, bajo la dirección de Jenaro Flores, se bifurcó en dos direcciones. Una, aceptando el discurso multiculturalista, decidió disputar espacios de poder mediante la participación electoral. La otra, esgrimiendo una posición de autodeterminación originaria, derivó en un proceso de lucha armada duramente derrotado desde el Estado en los noventa.

En este contexto estalla la guerra del Agua, en el año 2000. El conflicto se inicia en abril de ese año, a partir de una convocatoria de Felipe Quispe, el *mallku*. Designado secretario general de la CSUTCB en noviembre de 1998, llama a un bloqueo nacional de caminos contra la Ley de Aguas y el alza del precio del combustible, que afectaba duramente a los campesinos. El bloqueo empezó a principios de abril en el norte del Altiplano, cortando la ruta Copacabana-La Paz, siguió con el corte del camino La Paz-Oruro, extendiéndose luego a las rutas que unen Sucre, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y otras ciudades. En el Altiplano, a la lucha iniciada por los campesinos se unen otros sectores: transportistas, magisterio y juntas vecinales. La estrategia de lucha estaba impregnada de las tradiciones provenientes de la comunidad aymara: las decisiones se tomaban en asambleas o cabildos, que eran las instancias máximas de decisión en donde participaban todos en igualdad de condición; y el bloqueo se organizaba mediante el sistema de turnos rotativos por comunidad, igual que el abastecimiento de provisiones y otras cuestiones logísticas.

La respuesta gubernamental fue el estado de sitio y el confinamiento de los dirigentes. Inmediatamente estalló un motín policial, con respaldo en la población civil, a la que siguió una huelga de hambre de las esposas de los policías respaldando las reivindicaciones de sus maridos. La entrada en acción de los efectivos militares convocados por el gobierno, ante la deserción policial, provocó cruentos enfrentamientos en Achacachi y otros pueblos, dejando como saldo, al término de la

lucha, que las rondas indígenas reemplazaran a la policía y la justicia comunitaria a la ley del estado.

Mientras esto sucedía en el Altiplano norte, en Cochabamba, el 8 de abril de 2000, la Coordinadora Departamental por la Defensa del Agua convocaba una multitudinaria manifestación, en la que participaron trabajadores por cuenta propia, comerciantes, estudiantes, gente de clase media de la ciudad, para reclamar la rescisión del contrato con Aguas del Tunari, empresa a la que se pretendía ceder la distribución de agua en Cochabamba.⁸ En pleno estado de sitio, la multitud se enfrentó con la policía, levantó barricadas, quemó instalaciones gubernamentales, y se adueño de la céntrica Plaza 14 de Setiembre.

Concluido este primer round, el conflicto volvió a encenderse en setiembre del 2000. Esta vez son tres los protagonistas:

1. Los cocaleros del Chapare, organizados en las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, liderados por Evo Morales.
2. El movimiento campesino originario, con fuerte presencia en el Altiplano, liderado por Felipe Quispe, el *mallku*.
3. La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida de Cochabamba, que aglutinó en torno de los regantes del departamento a diversos sectores sociales.

El gobierno había elaborado otro proyecto de Ley de Aguas, basado en la administración privada del recurso, pero esta vez no sólo incluía a los centros urbanos sino también a los ríos y vertientes del valle de Cochabamba, tradicionalmente administrados por los campesinos y sus familias. Al mismo tiempo, el gobierno proseguía con la titularización de tierras comunarias en el Altiplano, y con la política de “coca cero”, a través del llamado “Plan Dignidad”. Concertado con la Embajada de Estados Unidos, se anunciaba la construcción de tres cuarteles en el Chapare, para contrarrestar cualquier movimiento opositor.

El bloqueo de caminos comenzó el 11 de setiembre y duró hasta el 7 de octubre de 2000. Como en oportunidades anteriores, se lo mantuvo férreamente, a partir de la estrategia combinada de obligación y rotación, practicada por las comunidades aymaras. Pronto originó escasez de productos alimenticios en las grandes ciudades, especialmente en La Paz, y despertó la adhesión de los pobladores de El Alto, quienes se organizaron para impedir el abastecimiento alimenticio de la capital por vía aérea.

⁸ Aguas del Tunari era una empresa perteneciente a la Transnacional Brechtel, de origen francés.

Los trabajadores y los migrantes urbanos de origen aymara de El Alto comenzaron a movilizarse, bloqueando los accesos a La Paz, donde el magisterio y los estudiantes apoyaban el bloqueo, mientras las mujeres de clase media organizaban las “marchas de los pañuelos blancos” pidiendo paz y diálogo.

En tanto en los valles, el movimiento cocalero cortaba la ruta Cochabamba-Santa Cruz, mientras la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida bloqueaba la carretera Cochabamba-La Paz. Desde el inicio se sucedieron violentos enfrentamientos entre los bloqueadores y los militares, quienes finalmente debieron retirarse ante la imposibilidad de despejar los caminos. Es así como se llega a una negociación, en la cual los tres actores fundamentales de esta lucha obtienen gran parte de sus reivindicaciones: Suspensión de la aplicación y posterior sustitución de la ley INRA, archivo definitivo de la Ley de Aguas, Fondos para la aplicación del Plan Integral de Desarrollo Rural, suspensión de la construcción de los cuarteles en el Chapare, y otras medidas reivindicativas del movimiento campesino y cocalero. El gobierno no aceptó poner en discusión el “Plan Dignidad”, negando el permiso para cultivar media hectárea de coca por familia campesina.

INTERMEZZO. EL MAS Y EL MIP

En estos años de lucha se fueron forjando también los instrumentos políticos del movimiento campesino, concebidos desde las organizaciones sindicales con el propósito de hacer valer sus intereses en el escenario estatal. En realidad, como dijimos antes, los dirigentes campesinos venían haciendo política desde el restablecimiento de la democracia, mediante alianzas infructuosas con los distintos partidos integrantes del “Pacto de gobernabilidad”, siempre en posiciones subordinadas. En 1996 se inicia un camino distinto, constituyendo un Instrumento Político, denominado Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP). Aliado con la Izquierda Unida, obtuvo cuatro diputados en las elecciones de 1997. Dos años después, en 1999, se adopta el nombre Movimiento al Socialismo (MAS) como sigla electoral, bajo el liderazgo de Evo Morales.⁹ A su vez, en noviembre del 2000, se forma como partido el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), liderado por Felipe Quispe, que se reivindica como “instrumento político de los verdaderos dueños de estas tierras”, plantea la reconstitución del Tawantinsuyo y apela a los principios morales y valores culturales y simbólicos de los pueblos originarios. El MAS, por su parte, definió un discurso basado

⁹ Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto. *La Revolución de Evo Morales: de la coca al palacio*, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006.

en la defensa de la soberanía nacional ligada al tema de la hoja de coca, cambiar el modelo neoliberal y rediseñar el sistema político claramente obsoleto, confrontando directamente con la Embajada norteamericana que llamó a no votar sus candidatos en las elecciones de 2002. En estos comicios, el MIP obtuvo el 6 % de los votos, mientras el MAS sorprendentemente trepó al 21 %, obteniendo el segundo lugar detrás del MNR que obtuvo el 22 %. Entre el MAS y el MIP obtuvieron 32 diputados y 8 senadores, la mayoría indígenas, verdadero hecho histórico. Como consecuencia de esto, algunos partidos de la elite como ADN debieron reciclarse, otros como CONDEPA directamente desaparecieron.

LA GUERRA DEL GAS

Los acuerdos que pusieron fin a la “guerra del agua” solo establecieron una tregua pasajera. Ya en junio de 2001 los campesinos del Norte del Altiplano organizaron un bloqueo de caminos que duró un mes, esta vez con reivindicaciones claramente políticas, como la derogación del Decreto Supremo 21060, el retiro de los efectivos policiales de las provincias, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de las comunidades y pueblos originarios, el reconocimiento del dominio de las naciones originarias de las tierras y los recursos naturales, es decir, reivindicaciones que superaban con creces el marco meramente corporativo e implicaban la confrontación directa con el Estado boliviano. Un nuevo acuerdo con Jorge (Tuto) Quiroga, quien había asumido como presidente interino en reemplazo de Banzer -renunció el 6 de agosto de 2001- les permitió obtener programas de microcrédito y mecanización, la suspensión definitiva del proceso de titularización de tierras en el departamento de La Paz y la discusión de una propuesta alternativa de la CSUTCB sobre la Ley INRA.

En enero del 2002, se produjeron en el Chapare los sangrientos enfrentamientos de Sacaba. Las seis federaciones campesinas se movilizaron contra el Decreto Supremo 26415, promulgado en los primeros días del año, que penalizó el transporte y comercialización de la coca producida en el Chapare. El resultado fue un choque feroz entre cocaleros y militares, con siete muertos. El movimiento campesino salió a respaldar a los cocaleros con un nuevo bloqueo de caminos que afectó a cinco departamentos. El gobierno tuvo que retroceder derogando el decreto, pero Evo Morales fue expulsado del Parlamento, y luego de su desafuero se le inició un proceso criminal por los hechos de Sacaba.

En febrero de 2003 el gobierno, nuevamente en manos de Gonzalo Sánchez de Lozada, anuncia un “impuestazo” a las clases medias para paliar el déficit presupuestario. El

rechazo es generalizado por parte de empleados públicos, amas de casa, profesionales, y otros sectores sociales. A ello siguió el amotinamiento de la policía, que salió a marchar a las calles de La Paz chocando con los efectivos del ejército apresuradamente convocados por el gobierno. En el descontrol que siguió al enfrentamiento, manifestantes quemaron edificios públicos, sedes de los partidos oficialistas, oficinas de las empresas privatizadas, sedes bancarias. Es decir, una violencia selectiva aplicada a los símbolos del modelo neoliberal en vigencia, y sus sostenes políticos, con un saldo de 32 muertos. Ni el MAS ni el MIP aportaron orientación política alguna, con lo cual el movimiento se disuelve por sí solo más que por la represión gubernamental.

En los meses siguientes el gobierno se sintió con suficiente fuerza para dictar una ley penalizando el bloqueo de caminos, y comenzó a difundir un proyecto de exportación de gas natural a los Estados Unidos a través de puertos chilenos. En esa situación, la CSUTCB dirigida por Felipe Quispe convoca en dos oportunidades, en el mes de setiembre, a bloqueos de caminos que no son acatadas por las bases. Pero he aquí lo inesperado: surge una nueva convocatoria aprobada en las asambleas comunales, a partir de la cual se inicia una marcha y bloqueo de caminos. En su transcurso, un grupo de *mallkus* y *mamatallas*, (secretarios generales y sus esposas), decide empezar una huelga de hambre en la Radio San Gabriel, en El Alto, exigiendo al gobierno demandas incumplidas de bloqueos anteriores, la liberación de Edwin Huambo (autoridad étnica), la suspensión de procesos judiciales contra dirigentes agrarios, y la defensa del gas.

El aislamiento de un grupo numeroso de turistas en Sorata, varados como consecuencia del bloqueo de caminos, le ofrece al gobierno la oportunidad de intervenir militarmente. El 19 de setiembre tiene lugar una incursión armada de policías y militares comandada directamente por el ministro de Defensa que se traslada en helicóptero a Sorata, ocupada militarmente igual que Warisata, con un saldo de media docena de muertos e innumerables heridos. El ataque desata la furia de los campesinos, que toman Sorata, queman el hotel, una financiera, la alcaldía. Situaciones similares se viven en Warisata y otras localidades del Altiplano norte, mientras los huelguistas de hambre de Radio San Gabriel llaman a continuar la lucha, exigiendo la renuncia del presidente y la defensa del gas. El bloqueo efectivamente se extiende, y su fuerza está dada por la unidad de campesinos, transportistas y el magisterio rural, que garantizan la medida.

Aparece entonces en escena otro actor: los pobladores de El Alto. Desde 1985, esta ciudad, que creció y sigue creciendo en forma explosiva, se alimentó de pobladores rurales formados en las tradiciones comunitarias aymaras y de mineros re-localizados,

portadores de sus tradiciones de organización y lucha. El resultado fue la formación de distintas organizaciones sociales, entre las que se destacan la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y la Central Obrera Regional (COR). Cabe señalar que ésta última si bien conserva las tradiciones de la COB, estaba formada, en realidad, por asociaciones de comerciantes y artesanos que trabajan en los mercados, llamadas las gremiales. En El Alto había -y sigue habiendo- gran cantidad de trabajadores asalariados, pero la mayoría están precarizados y con niveles de organización sindical incipiente (en muchos casos directamente inexistente).

Los alteños a través de estas organizaciones luchaban por sus propias reivindicaciones ciudadanas, pero a partir de los sucesos de Warisata se unieron a la campaña en contra de la venta del gas a Estados Unidos. El 3 de octubre la COB se pronuncia, en el ampliado de Huanuni, por la huelga general indefinida contra el gobierno. El 8 de octubre, la COR y la FEJUVE decretaron el paro indefinido en El Alto y se unieron al bloqueo de caminos. El 9 se produce un tremendo enfrentamiento entre los mineros de Huanuni con la policía y el ejército en los alrededores de El Alto, cuando los efectivos quisieron forzar el levantamiento del bloqueo de la ruta La Paz-Oruro. El 10 los bloqueos cercaron La Paz, dificultando el abastecimiento de gasolina al impedir la salida de camiones cisternas de la planta de Sensata. El 11 de octubre los barrios de La Paz amanecieron sitiados, sin gasolina, sin carne y con todas las vías de acceso a la ciudad cerradas. El ejército intentó liberar el flujo de gasolina, y en los enfrentamientos asesinaron a 11 campesinos: el reclamo central pasó a ser la renuncia del presidente. El 12 de octubre una nueva represión militar terminó con la vida de 26 personas que participaban del bloqueo. La situación cada vez se radicalizaba más: el gobierno intentaba movilizar soldados provenientes del Oriente (cambas) atizando el odio hacia los collas; los pobladores de El Alto decidieron apresar a los familiares de los policías para obligarlos a que no disparen contra el pueblo. El lunes 13, más de 100.000 pobladores de El Alto bajaron a la ciudad y ocuparon, tras terca lucha con la policía, la plaza de San Francisco. Por la noche llegaron mineros de Siglo XX y de Oruro a reforzarlos. En esas condiciones, el gobierno de Sánchez de Losada comenzó a disgregarse: el Vicepresidente, Carlos Mesa, anunció su alejamiento del gobierno, siendo seguido por varios ministros. Aun cuando la COB no tenía fuerzas ni posibilidades para organizar y centralizar la huelga general por tiempo indefinido junto con el bloqueo de caminos, era claro que en el imaginario colectivo el llamado significaba la unificación de los mineros, los trabajadores fabriles y los campesinos en

pos del derrocamiento de Sánchez de Losada, un asesino con el cual nadie quería dialogar. En los días siguientes a la gran marcha del 13 de octubre, los bancos, las escuelas, las líneas de aviación, los comercios, las industrias, todo estaba paralizado en La Paz, y los residentes de la zona sur -la elite paceña- aterrorizados por lo que consideraban inminente asalto de los insurrectos. El 16 Carlos Mesa pronuncia un discurso, en el cual manifiesta que no está con el gobierno pero tampoco “con una utopía que no sabe adonde va ni que quiere”.¹⁰ La intervención de Mesa fue una jugada decisiva, ya que los insurrectos se limitaban a exigir la renuncia del presidente, la no venta del gas y la devolución de los recursos naturales al Estado. Ni el MAS ni el MIP proponían un cambio de sistema, a lo sumo de modelo, pero no de sistema. En las primeas horas del 17 de octubre, perdido el apoyo del Parlamento, de la elite, del ejército, de la Iglesia y de la Embajada, Gonzalo Sánchez de Lozada con su familia y un puñado de ministros escapó a los Estados Unidos. Esa misma tarde Carlos Mesa era designado por el Parlamento nuevo presidente de Bolivia.

INTERPRETACIONES

Félix Patzi Paco sostiene que en los países estructurados en forma colonial como Bolivia, las luchas étnicas eclipsan y subordinan la lucha de clases. Las clases no se definen por la ubicación ocupacional, sino que las ocupaciones están definidas por la pertenencia racial y/o étnica, “de ahí que en momentos históricos de convulsión social prevalece más lo étnico que la clase”.¹¹

Patzi Paco analiza desde esta perspectiva la guerra del agua y del gas, estableciendo un vínculo entre el movimiento encabezado por Zárate Willka en 1899 “que no quería integrarse al país llamado Bolivia” y la insurrección, un siglo después, del pueblo aymara. Los levantamientos del 2000 y 2003 mostrarían dos proyectos inconciliables:

“Por un lado el de los ayllus, centrado en la soberanía colectiva comunitaria, formado por una corporación de trabajadores del campo y de la ciudad, ejecutivo y legislativo al mismo tiempo. Por otro, el de la burguesía criolla blancoide, centrado en el parlamento que flota por encima de la sociedad, cuyo poder radica en un grupo de representantes automatizados que deciden el destino de la colectividad y se legitima mediante la enajenación de la soberanía en el voto secreto”.

¹⁰ Citado por Félix Patzi, en Forrest Hylton, Félix Patzi, Sergio Serulnikov y Sinclair Thomson. *Ya es otro tiempo el presente*, La Paz, Muela del Diablo Editores, 2005, p. 272.

¹¹ Félix Patzi, ob. cit., p. 197.

Esta contradicción, según el autor, continúa siendo, a 175 años de la fundación de la República de Bolivia, “el ordenador de las clases sociales” en el país.¹²

Para Patzi, la insurrección aymara constituye el elemento central de las jornadas del 2000 y 2003. En su transcurso se recuperó el *ethos comunitario originario*, imponiendo como estrategia de lucha una *tecnología social* proveniente de la comunidad, la combinación de obligación y rotación que hizo de los bloqueos un arma indoblegable:

“...se implementaron turnos por comunidad, de modo que cada una de ellas sólo permaneció dos días, para luego retornar a su comunidad. Además los miembros de cada comunidad salieron de manera obligatoria, ya que este acto es considerado como una acción más al servicio de la comunidad. Esa lógica de obligatoriedad es el eje articulador de la cohesión comunal, más conocida por ellos en términos simples como disciplina comunal.”¹³

Patzi sostiene que si bien los protagonistas de estas luchas obtuvieron importantes reivindicaciones, el balance no es del todo favorable, dadas las limitaciones programáticas del movimiento originario. En el año 2000 Quispe y los campesinos originarios del altiplano pusieron en marcha recursos sociales provenientes de las comunidades, pero no lograron plasmar una propuesta política alternativa. En los valles, tanto los coccaleros como la Coordinadora por el agua y la vida lo máximo que llegaron a esbozar fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En la ausencia de un proyecto autónomo alternativo está la base del fracaso parlamentario del MIP y del MAS, que lejos de ser portavoces de la comunidad, se organizaron bajo la forma liberal, se enredaron en competencias por el liderazgo y monopolizaron las decisiones en manos de los dirigentes, con lo cual terminaron reforzando el sistema político liberal parlamentario.

En el 2003 el balance se reitera. Las luchas fueron impulsadas por “un movimiento multiforme con alta capacidad de estrategia de lucha, pero huérfano de dirección política”.¹⁴ No hubo propuesta alternativa al sistema de la economía capitalista en su versión neoliberal ni a la desprestigiada democracia representativa, sino una competencia entre Quispe y Evo Morales, enfrentados tras opciones políticas distintas. Quispe postulaba la autodeterminación de las naciones originarias confederadas, reconstituyendo en términos discursivos la reconstitución de la sociedad ancestral,

¹² Félix Patzi, ob. cit., p.218.

¹³ Félix Patzi, ob. cit., p. 213.

¹⁴ Félix Patzi, ob. cit., p. 247.

abrevando en las fuentes culturales e ideológicas del discurso katarista de los '70; mientras Evo Morales se apoya en una propuesta ideológicamente multicultural, que no pretende terminar con el Estado boliviano, sino participar en él para mejorar las condiciones de vida de los indígenas, adoptando un mensaje popular y democrático que fácilmente llega a la gente de izquierda. En este análisis queda explicado el destino diferente posterior de ambos movimientos, uno circunscripto al altiplano y con escasa presencia electoral, el otro ascendiendo al control del estado, a partir de su expansión a las clases medias urbanas de las grandes ciudades.

Pablo Mamani Ramírez, sociólogo aymara, resalta la participación de los indígenas urbanos aymaras de El Alto, en las jornadas de 2003 contra Sánchez de Lozada. Sostiene que en esta ciudad aymara hay una construcción social de la vida cotidiana, sobre la cual aparece un sentimiento de autoafirmación de su población indígena, que se manifiesta en las acciones colectivas emprendidas en las jornadas de lucha. En sus obras, Mamani Ramírez combina dos perspectivas de análisis de los movimientos sociales: la movilización de recursos y el paradigma de la identidad.¹⁵

Siguiendo a Charles Tilly, Sydney Tarrow y Marc Steinberg, sostiene que los movimientos sociales son capaces de construir repertorios discursivos y de acción colectiva. Con ellos se pone en marcha la producción de significados o símbolos y la estructura de la organización colectiva. En Bolivia, los movimientos sociales han producido y hecho circular un conjunto de símbolos indígenas: la *wiphala* multicuadrada, los ponchos rojos o verdes (autoridades originarias), el *pututu*, la hoja de coca, los *awayus* multicolores.¹⁶ Y siguiendo a Alberto Melucci y otros teóricos latinoamericanos, utiliza el enfoque de la identidad para explicar los sentidos que dan cuerpo a los movimientos sociales, esto es, la construcción de una identidad colectiva mediante la definición de un sistema de acción (las posibilidades de los actores sociales para evaluar los procesos y tomar decisiones que incidan en los mismos y en la obtención de sus objetivos). A partir de este anclaje teórico, el autor pondrá el acento en la movilización de los pobladores alteños, a la que define como

“una movilización densa que articula estrategias, sentidos y dignidades colectivas, que se manifiestan en acciones coordinadas y por turnos al interior de las familias,

¹⁵ Pablo Mamani Ramírez. *El rugir de las multitudes: la fuerza de los levantamientos indígenas en Bolivia/Qullasuyu*, El Alto, Yachaywasi, 2004.

¹⁶ *Wiphala*: bandera indígena; *pututu*, instrumento musical; *awayus*, pieza textil tradicional de las mujeres indígenas.

zonas y distritos e incluso entre las diversas organizaciones existentes en el territorio urbano de esta ciudad.”¹⁷

El Alto constituye entonces, el epicentro de la lucha contra Sánchez de Lozada. En su relato aparecen los mineros, otros trabajadores asalariados (transportistas, maestros), la Central Obrera Regional, pero el centro superlativo de la lucha lo constituyen los pobladores alteños y sus organizaciones barriales, las juntas vecinales, que al calor de la movilización se constituyen en *microgobiernos territoriales*, con un claro sentido de pertenencia territorial e identidad aymara. Su hipótesis central es que los movimientos originarios en Bolivia y sus acciones prácticas (levantamientos, bloqueos, etc.) “se mueven desde los microespacios locales y regionales porque tienen legitimidad, fuerza, liderazgo y estructuras de organización” y desde ahí se expanden hacia el resto de la sociedad y el sistema político.¹⁸

Para Mamani Ramírez, la caída del gobierno de Sánchez de Lozada y el proceso político posterior tendrá implicancias importantes para las mayorías nacionales: suspensión de los proyectos de exportación de gas a Estados Unidos, rediscusión de la ley de hidrocarburos, convocatoria a la Asamblea Constituyente, mejoras para las mayorías marginadas y empobrecidas del país. Pero mantiene sus dudas respecto de la liquidación del modelo neo-liberal y advierte que la clase política sobrevivió al levantamiento indígena popular. Su expectativa está centrada en el desarrollo de los micropoderes locales y su expansión e incidencia en la política nacional.

Inspirado en las concepciones teóricas de Paolo Virno, **Raúl Prada Alcoreza** sostiene que las jornadas de setiembre-octubre de 2003 en Bolivia son el resultado de un proceso de acumulación de los movimientos sociales operado a partir de las grandes movilizaciones del año 2000 en adelante. La guerra del gas unificó a las distintas vertientes de los movimientos sociales diseminados en sus componentes regionales, la defensa del gas resultó ser una consigna unificadora y a la vez de carácter nacional: contra las políticas neoliberales, contra el ajuste estructural, en defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional, por una distribución equitativa de los recursos energéticos. “No sólo se trata de una consigna nacional, sino de una consigna que replantea popularmente la concepción de nación.”¹⁹. Prada Alcoreza sostiene que de la

¹⁷ Pablo Mamani Ramírez. “El rugir de la multitud: levantamiento de la ciudad aymara de El Alto y caída del gobierno de Sánchez de Lozada”, en *OSAL N° 12*, diciembre 2003, p. 18.

¹⁸ Pablo Mamani Ramírez. *El rugir de la multitud...*, p. 185.

¹⁹ Raúl Prada Alcoreza. “Perfiles del movimiento social contemporáneo. El conflicto social y político en Bolivia”, en *OSAL N° 12*, diciembre 2003, p. 37.

movilización social “va a emerger la forma organizada de la multitud”, un nuevo perfil de los movimientos sociales, “una movimiento social templado por la experiencia de la lucha, maduro para gestar decisiones desde abajo, sometido al irradiante control social”, que va a dar a luz a su “nueva criatura, el desarrollo del intelecto general autónomo”.²⁰

Prada Alcoreza enhebra dos ideas fundamentales en la construcción de su pensamiento autonomista. Parafraseando a Zavaleta Mercado, quien sostenía que el proletariado minero era la clase que contenía a la nación, Prada Alcoreza sostendrá que El Alto es la ciudad que contiene a la nación. La explotación minera, articulada a las distintas formas de explotación rural, sintetizaba el desarrollo del capitalismo en Bolivia; en tanto el proletariado minero sintetizaba en su conciencia, en su memoria colectiva, las múltiples memorias, los múltiples saberes de los explotados, constituyendo su centralidad política el motor de las luchas sociales. Esta centralidad política es la que hoy detentaría la ciudad de El Alto, la ciudad que contiene a toda la nación, una ciudad y no una clase, que daría cuenta de las mutaciones sociales operadas en el país, no solo por receptor los flujos migratorios del altiplano, sino porque la historia contemporánea de Bolivia se condensa en esta ciudad, la demanda política de los movimientos sociales se condensa en El Alto, centro de la rebelión de octubre.

La otra idea central de Prada Alcoreza tiene una ubicación temporal definida: 1979. Ese año los sindicatos campesinos kataristas rompen definitivamente con el Pacto-Militar Campesino, rompen con la Confederación de Campesinos de Bolivia oficialista y conforman la Confederación Unica de Campesinos Tupak Katari (luego CSUTCB) y adhieren a la Central Obrera Boliviana, delineando una nueva relación de fuerzas, y más importante, la unidad de obreros y campesinos gestada ese año rompe los moldes ideológicos del nacionalismo revolucionario (“movimientismo”) definiendo un nuevo perfil político de la multitud. Prada Alcoreza concluye afirmando que “el movimiento social construye su memoria para interpretar sus propias acciones”. Esta construcción comprende dos vivencias: “una mesiánica al reivindicar a las víctimas, otra política, significando las actuales luchas mediante analogías con la utopía.”. Esta es la manera en la que la multitud “el intelecto general autonomizado” interpreta y reinterpreta su propia experiencia, dando un significado histórico a sus acciones en el presente y utilizando materiales del pasado resignificado para construir el futuro.²¹

²⁰ Raúl Prada Alcoreza, ob. cit., p. 39.

²¹ Raúl Prada Alcoreza, ob. cit., p. 45.

Por último, **Eduardo Molina**, dirigente trostkista boliviano, ofrece un balance de las jornadas de octubre de 2003 desde la perspectiva del marxismo.²² El balance de Molina otorga mayor relieve a la convocatoria a la huelga general indefinida lanzada por la COB el 3 de octubre durante el ampliado de Huanuni. Aún cuando reconoce que la huelga como tal era muy débil y solo fue cumplida por algunos distritos del magisterio, los mineros de Huanuni y otros sectores, y que “la insurrección social espontánea de El Alto es el punto más alto del levantamiento”, considera que la convocatoria de la COB alcanzó a actuar como un referente político unificador del conjunto de movilizaciones sociales, ayudando a transformar los bloqueos, las luchas y las movilizaciones en una insurrección general contra el gobierno.

La irrupción de la clase obrera para este autor se produce entonces a través de tres vías: el rol político jugado por la COB y algunas instancias intermedias -como la COD de Oruro y la COR de El Alto; los trabajadores mineros de Huanuni; y la participación, en El Alto y en las laderas y barriadas paceñas de una importante cantidad de trabajadores asalariados, mayoritariamente precarizados y no sindicalizados, que no encuentran contención organizativa y política en los movimientos existentes. Molina, sin dejar de reconocer la debilidad de la intervención de los trabajadores y la importancia crucial del levantamiento de El Alto y la movilización de los campesinos originarios aymaras del Altiplano Norte, insiste en criticar los planteos “indigenistas”, a los que acusa de destacar unilateralmente la recuperación de tácticas utilizadas en las sublevaciones del siglo XVIII sin comprender la necesaria alianza, en el presente, con los explotados de la ciudad para llevar la insurrección al éxito.

También destaca Molina la emergencia de un poder dual de carácter territorial, embrionario, espontáneo, atomizado, que no logra trascender en formas superiores de organización que permitieran su desarrollo y centralización -bajo la forma de coordinadoras, asambleas populares o comités de lucha.

“La tradición de lucha de las masas bolivianas combina la fuerza explosiva de la espontaneidad, con un denso tramado social y organizativo, conformado por los sindicatos obreros y campesinos, las asociaciones de de los mercados y artesanos (los gremiales) y otros sectores, como los transportistas, las juntas vecinales, las organizaciones de inmigrantes en ciudades como El Alto o las autoridades tradicionales en las comunidades rurales.”²³

²² Eduardo Molina. “Octubre como ensayo revolucionario”, en *Revista de los Andes* N° 1, Otoño de 2004.

²³ Eduardo Molina, ob. cit.

En esta trama organizativa se apoyó el levantamiento para adquirir la fuerza que le permitió expulsar a Sánchez de Lozada del gobierno, pero al no haber por parte de la COB, el MAS o el MIP una orientación revolucionaria, no se pudo abrir una fase generalizada de doble poder ni una crisis en el núcleo del aparato estatal, imponiéndose finalmente una salida institucional a través de la designación presidencial de Carlos Mesa Gisbert.

A MODO DE PROVISORIA CONCLUSION

A través de la lectura de textos escritos en distintos momentos de los últimos años, intentamos aproximarnos a las respuestas que diferentes autores ensayaron frente a los complejos interrogantes abiertos en los procesos sociales contemporáneos de Bolivia.

Es sumamente controvertible la principal tesis de Patzi Paco, sobre la prevalencia de lo étnico sobre lo clasista, o mejor dicho, la constitución de la clase a través del clivaje étnico. ¿Son homogéneas las comunidades? ¿no existe estratificación social al interior del tejido comunitario y del movimiento originario aymara? ¿Pueden ser subsumidas estas diferencias por las teorías de la colonialidad esgrimidas por los teóricos del nacionalismo aymara? El énfasis en la vigencia de la lógica comunitaria lo lleva a Patzi a relativizar la especificidad de la participación de los sectores urbanos. Este es el punto retomado por Mamani Ramírez, que advierte la importancia del entramado urbano de El Alto y su papel central en el levantamiento de Octubre de 2003. Su idea de los microgobiernos territoriales, el eje puesto en el microespacio local y regional, le permite iluminar los mecanismos de movilización social alteña al precio de desentenderse de la problemática estatal.

Con Prada Alcoreza podemos apreciar la fuerza y la debilidad de un marco teórico que ilumina un momento particular de la historia boliviana, la reconfiguración de clases y sectores sociales operadas a partir de 1985, cuando la fuerza social que durante cincuenta años expresó la centralidad política de las clases subalternas -el proletariado minero- sufrió una derrota histórica y como consecuencia, una lenta declinación y reconversión social. La *multitud* como sujeto y el *intelecto general autonomizado* son categorías que pretenden dar cuenta de este cambio cualitativo en las relaciones de fuerza sociales. Paradójicamente, el autor exhibe en su análisis la dificultad para comprender las mutaciones en la construcción de la subjetividad de los sectores populares en las nuevas condiciones. Con la inclusión de nociones confusas como “potencia” y “acto” intenta comprender la lógica subyacente de un sujeto fácilmente

definido pero resbaladizo a la hora de interpretar sus acciones debido a la multiplicidad de la composición social incluida en su definición.

Por último, las tradiciones históricas de la clase obrera y los debates sobre la emergencia del poder dual aparecen en los análisis de Eduardo Molina. Es claro que la derrota de los mineros en los ochenta significó también un retroceso político de las fuerzas tradicionales de la izquierda boliviana -el POR y el PC, este último también desgastado por su participación en el gobierno de la UDP (1982-1985). Hay entonces un debilitamiento de las fuerzas tradicionales de la izquierda, muchos de sus antiguos seguidores se encolumnaron en los nuevos partidos surgidos a fines de siglo, principalmente el MAS. La izquierda marxista sostendrá que el proyecto de éste último es en definitiva reformista, mientras que el nacionalismo aymara por sus propias limitaciones etnocentristas no puede construir un proyecto societal alternativo que involucre y abarque al conjunto de la población pobre y explotada de Bolivia. Es previsible que la superación de estos déficits requerirá -desde esta perspectiva teórica y política- no solo una crítica a la ausencia de una dirección política revolucionaria - diagnóstico que en Bolivia es compartido por intelectuales de distinto signo ideológico y dirigencias de los más variados movimientos sociales- sino también la construcción de un proyecto político alternativo que logre hegemonizar a los trabajadores, los sectores populares y las mayorías originarias.

Estas son algunas de las respuestas a los apasionantes interrogantes que dispara la siempre cambiante realidad boliviana. Está claro que hay que seguir ensayando.